

Con reserva y completa discreción, el año pasado Gonzalo Blumel, exministro del Interior, y Juan José Obach, director ejecutivo del centro de estudios Horizontal —ligado a Evópoli—, comenzaron a trabajar en la idea: generar propuestas concretas para abordar la creciente crisis de seguridad en el país.

Para ello, convocaron a un grupo transversal de expertos que contara con conocimientos teóricos, pero también con experiencia práctica en la materia y, en conjunto, elaboraran un documento, que ya está listo y al cual accedió en exclusiva "El Mercurio".

El grupo comenzó a tomar forma en agosto. Tras llamados y distintas conversaciones se incorporaron a figuras reconocidas por su manejo en temas de seguridad, entre ellas, Christian Alveal, ex director nacional de Gendarmería; el general (r) de Carabineros y actual director de Seguridad en la Municipalidad de La Reina, Enrique Bassaletti, y el ex general subdirector nacional de Carabineros y actual director del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Esteban Díaz.

También sumaron a Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior en el segundo gobierno de Sebastián Piñera; a Pilar Giannini, exjefa de la División de Seguridad Pública del mismo ministerio y hoy subsecretaria ejecutiva de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (Amszo), y a Catalina Mertz, ex directora ejecutiva de Paz Ciudadana y asesora de altas autoridades de gobierno en seguridad.

Además, se incorporaron Luis Toledo, exfiscal y director del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado (Cescro) de la USS, y Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad en la macrozona sur.

Ya con el equipo armado —que destaca no solo por la *expertise* de sus integrantes en distintas áreas, sino también por su cercanía con diferentes sectores políticos dentro de Chile Vamos—, la tarea estaba definida: generar propuestas basadas en evidencia y experiencias prácticas para abordar el problema creciente de la inseguridad. Para lograr esto realizaron diez reuniones de trabajo en las oficinas del centro de estudios, ubicadas en Las Condes.

UN EXPERTO POR TEMA

Las sesiones siguieron un formato estructurado. "Cada uno exponía sobre una problemática en particular, que conforman los ejes de la propuesta, generándose una discusión y retroalimentación respecto de la cual Horizontal recogía los aspectos más relevantes que posteriormente se concretaron en las diversas medidas", cuenta el excoordinador de la macrozona sur.

Urquizar expuso sobre terrorismo, Mertz habló sobre prevención social enfocada en infancia y Giannini lo orientó a los gobiernos locales. Por su parte, Toledo se centró en el crimen organizado, Galli en inteligencia y los generales (r) de Carabineros discutieron la situación de las policías.

Christian Alveal, por su parte, expuso sobre la problemática de las cárceles. Consultado sobre el aporte de la experiencia de los distintos miembros del grupo, comenta que "la política criminal en la región, Chile no fue la excepción, se centró básicamente en sacar a los delincuentes de las calles, desentendiéndose de las cárceles. Un error estratégico que permitió que delincuentes estando presos formaran poderosos grupos criminales que azotan la región".

Añade que valora "este trabajo multidisciplinario, pues no es común que se discuta el mundo carcelario, ni menos su rol para de-



Parte del equipo de expertos, liderado por Gonzalo Blumel, se reunió este jueves.

PODRÍA SENTAR LAS BASES DE UN FUTURO PROGRAMA DE GOBIERNO:

LAS 100 MEDIDAS QUE PREPARA LA CENTRODERECHA para enfrentar la crisis de seguridad

Galli, Urquizar, Alveal, Bassaletti, Mertz, Giannini, Blumel, Díaz y Toledo son los nombres que conforman el equipo convocado por el centro de estudios Horizontal para generar una hoja de ruta frente a la delincuencia y el crimen organizado. El informe se dará a conocer en un seminario en el Centro Cultural La Moneda a finales de mayo. | FLORENCIA DONOSO R.

sincentivar la reincidencia delictual".

"Tras cada exposición, se abría un espacio para conversar, del que nacía el diagnóstico y las posibles soluciones. "Se discutían las propuestas, se aunaban posiciones y se acordaban mejoras", comenta Giannini.

En estas reuniones de trabajo también estuvo presente Pilar Lizana, experta en crimen organizado y narcotráfico, quien participó de todas las discusiones.

El investigador de Horizontal, Alfonso España, se desempeñó como secretario ejecutivo de la mesa y tuvo la tarea de consolidar toda esta información en un documento, el que luego fue revisado por cada miembro del equipo. "Le tocó trabajar hard", se ríe uno de los miembros del grupo, aludiendo a las idas y venidas de los archivos entre los distintos expertos.

Así se concretó la hoja de ruta, basada en un diagnóstico actualizado de la situación del crimen organizado en el país.

Pero el proceso de construcción no se limitó solo a estas sesiones internas. Una vez creado este borrador, buscaron la opinión de otros expertos para obtener nuevas perspectivas. Así, lo socializaron con el exsubsecretario del Interior de Piñera, Rodrigo Ubilla; el exministro del Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, y el director nacional de Seguridad Pública en el primer gobierno de Piñera y fundador de Alto —empresa pionera en el uso de tecnología para la seguridad—, Jorge Nazer.

EL DOCUMENTO FINAL

El resultado fue un conjunto de plantea-



Una de las propuestas es la creación de fuerza liderada por la PDI para identificar y expulsar a inmigrantes irregulares.

“Esperamos que sean consideradas por los candidatos del sector para poner sobre la mesa las medidas necesarias para avanzar”.

JUAN FRANCISCO GALLI
 Exsubsecretario del Interior

“Contiene medidas que surgieron de la visión y experiencia profesional de quienes fuimos convocados”.

LUIS TOLEDO
 Eftisical

mientos contenidos en el informe “Un pacto por la seguridad: 100 propuestas para enfrentar la delincuencia en Chile” que, organizadas en ocho ejes (ver recuadro), detallan no solo ideas, sino también plazos y cómo implementarlas.

Su aporte es que “contiene una serie de medidas que surgieron desde la visión y la experiencia profesional de cada uno de quienes fuimos convocados, obteniendo finalmente propuestas que tienen énfasis en la gestión, la coordinación interinstitucional, en la disminución de la corrupción y de los delitos, y que persiguen apuntar a la construcción de un sistema de seguridad pública que se relacione también con el mundo privado”, analiza el exfiscal Toledo.

En este sentido, afirma que intentan aportar con “herramientas, canales, interoperabilidad y gestión que permitan eficiencia en las políticas públicas para disminuir la impunidad en áreas delictivas muy lesivas para la sociedad”.

Algunas de las propuestas del documento son la creación de dos nuevas cárceles de seguridad para líderes de bandas y un nuevo sistema de regímenes penitenciarios diferenciados, la creación de fuerzas de tarea conjuntas contra el crimen organizado y otra para el control fronterizo, la creación de un Tribunal Supraterritorial Especializado en crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, entre otros.

“Es una hoja de ruta concreta para mejorar la seguridad, abordar el problema del crimen organizado que enfrenta el país y reducir el temor de la ciudadanía”, sostiene Pilar Giannini, y agrega que el documento desta-

ca “el rol que juega la coordinación interinstitucional y el trabajo colaborativo para la resolución de problemas de seguridad, la revisión de la experiencia comparada y la presentación de buenas prácticas concretas acordes a la realidad del país”.

LA PRIMERA PIEDRA

“El documento constituye una verdadera hoja de ruta”, asegura Blumel. Aunque la iniciativa surge desde Evépoli, como el grupo cuenta con cercanos a los tres partidos de Chile Vamos, el documento adquiere un carácter transversal y de consenso dentro del sector.

Además, se podría consolidar como el primer esfuerzo concreto que podría derivar las medidas sobre seguridad de un programa de gobierno del bloque.

Al ser consultado por esta posibilidad, Blumel contesta que “si es que quienes asuman el desafío de ir a una elección presidencial toman estas propuestas, bienvenido sea. Los centros de estudio siempre buscamos contribuir en el debate de las ideas”.

Agrega que “ese es el trabajo de un centro de estudio, incidir en la discusión pública a través de buenas políticas públicas basadas en la evidencia”.

Galli, por su parte, espera que “puedan ser consideradas por los candidatos del sector para poner sobre la mesa las medidas que consideramos necesarias para avanzar en el corto, mediano y largo plazo”.

Algunos aclaran, eso sí, que la precandidatura presidencial del sector, Evelyn Matthei, no conoce el detalle del documento, pero que han conversado con ella las propuestas de seguridad, y existen bastantes coincidencias. Más allá de mirar un futuro gobierno, en el equipo afirman que es clave alcanzar consenso entre los distintos sectores políticos para avanzar en estas materias, por lo que esperan que algunas medidas comiencen a aplicarse lo antes posible, incluso en esta administración. Esa es la razón tras el título del documento, dice.

“Un pacto es una invitación a todos los actores a trabajar unidos en una agenda que no es propia de un sector, sino que es un verdadero desafío país; quizás el más importante desde la vuelta a la democracia”, se lee en una carta firmada por Blumel y Obach al inicio del informe.

“En tiempos en que el Gobierno ha declarado que existe una crisis de seguridad y las encuestas muestran que los chilenos consideran, por lejos, a la seguridad como su principal preocupación, este documento pretende proponer un camino para avanzar”, indica Galli. Añade que lo proponen “como un intento por aunar voluntades para enfrentar un tema que es de primera prioridad para el Estado y la ciudadanía”.

Por lo mismo, y para darlo a conocer, están organizando un seminario para el 24 de mayo en el Centro Cultural La Moneda. En este, la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizará una introducción, y luego se desarrollará un panel de conversación enfocada en la seguridad municipal. Para este, ya está confirmada la presencia de las alcaldesas de Providencia y Vitacura, Evelyn Matthei y Camila Merino. ■

“Alrededor de una quincena de comuneros mapuches del sector rural de Lumaco, en la provincia de Malleco, asaltaron e incendiaron tres camiones de la empresa forestal Arauco en protesta porque la compañía explota un predio con plantaciones de pino insignie sobre el cual reclaman derechos ancestrales”.

Así informaba “El Mercurio”, el 2 de diciembre de 1997, un hecho que, desde el principio pareció inusual.

En la zona ya había tomas y manifestaciones, pero quemar camiones era, para la época, algo nuevo.

Recuerda Domingo Namuncura, director de la Conadi en aquella época, que las mismas comunidades indígenas se vieron sorprendidas. Y no hubo, por bastante tiempo, nadie que reivindicara el atentado.

Posteriormente, “dentro del movimiento indígena comenzaron los comentarios. Se decía que habían sido los ‘niños nuevos’, los de la CAM”, agrega.

Aunque el hecho se investigó, y hubo 12 procesados, el gobierno de esa época no le dio mayor importancia política al hecho. “La idea era priorizar nuestra atención en las comunidades que si tenían interés en establecer un diálogo político con el Estado. Pensábamos que el resto era un grupo muy reducido, sin ningún impacto”, expresa el exembajador en Guatemala.

Tiempo después se sabría la verdad. Era el primer atentado de lo que se conocería oficialmente como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Ese día, hace 27 años, fue también el debut de Héctor Llaitul, como parte de una operación violenta en el marco de presuntas reivindicaciones indígenas.

“En Lumaco, personalmente, estuve ahí, aportando a la organización y lucha de esas comunidades. (...) Los mapuches partieron y en el camino decidieron que si encontraban un camión, lo quemarían. (...) Los forestales arrancaron, alguien sacó un encendedor y entre todos echaron la chumiza adentro de los camiones y la encendieron (...).”, cuenta el mismo Llaitul en el libro “Conversaciones con un wechafe en la prisión política”, de Jorge Arrate.

El hecho marcaría un antes y un después en la macrozona sur, pues desde ese momento la CAM empezaría a levantarse en armas —y luego otros movimientos— bajo el liderazgo de Héctor Llaitul Carrillanca, el mismo que hoy está a la espera de la condena que dictará el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco el 7 de mayo. Y esta podría ser histórica: de 25 años de cárcel.

LÍDER OPERATIVO E INTELLECTUAL

Fuentes conocedoras de la violencia en la zona relatan que “Llaitul le da contenido político y operativo a la violencia en la CAM, un modelo que es replicado después por las dis-